

ENTREGA DE IMPEDIMENTO (S)

COMISION DE POSTULACION PARA ELEGIR A
MAGISTRADOS DE LA CORTE DE APELACIONES

RECIBO
11 SEP 2019

SELLO DE RECIBIDO

RECIBE: Y. V. V. X. C. I. HORA: 15:35

Nombre del postulante: Rosa María De León Cano
Expediente No.: 453

Nombre del denunciante (individual o jurídico): Helen Beatriz Mack Chong
DPI No.: 1852 72533 1101 Representación legal: _____

Si comparece en representación de persona jurídica, acredita su calidad: SI _____ NO _____

• DESCRIPCIÓN DEL ACTO (S) DENUNCIADO (S):

Se denuncia que violento con su proceder como Magistrada de Apelaciones en el año 2003 garantías constitucionales y del debido proceso que afectaron directamente el caso por el asesinato de Myraa Mack

• MEDIOS DE PRUEBA QUE ACREDITA:

Se adjunta CD que contiene sentencia de Casación que revirtió el fallo en que intervino la denunciada y se acompaña también sentencia de la Corte IDH referida al caso Myraa Mack y en el que se menciona el caso denunciado

Guatemala, 11 de septiembre de 2019

NOMBRE (de quien entrega): Luis Enrique Alvarado G.

DPI (de quien entrega): 1711 38384 0101

FIRMA:

[Firma]



**SEÑALAMIENTO DE IMPEDIMENTO A LA POSTULACIÓN DE
ROSA MARIA DE LEON CANO**

**SEÑORES DE LA COMISIÓN DE POSTULACIÓN DE CANDIDATOS A
MAGISTRADOS A CORTE DE APELACIONES Y OTROS TRIBUNALES DE
IGUAL CATEGORÍA – PERÍODO 2019-2024**

HELEN BEATRIZ MACK CHANG, de sesenta y siete años de edad, ejecutiva, soltera, guatemalteca, de este domicilio y vecindad, me identifico con Documento Personal de Identificación con código único de identificación número 1852 72533 1101 extendido por el Registro Nacional de las Personas, comparezco en mi calidad de presidente de la junta directiva y representante legal de la Fundación Myrna Mack, calidad que acredito con el acta notarial de mi nombramiento, autorizada en la Ciudad de Guatemala, el 21 de febrero de 2019, nombramiento que está debidamente inscrito en el Registro de Personas Jurídicas bajo la partida 332, folio 332, del libro 59 de nombramientos del Registro de las Personas Jurídicas del Ministerio de Gobernación; señalo como lugar para recibir notificaciones la segunda calle quince guion quince de la zona trece de la ciudad de Guatemala. Respetuosamente comparezco ante ustedes, y al efecto

EXPONGO:

OBJETO DE MI COMPARECENCIA: Por este medio señalo de impedimento la postulación de **ROSA MARIA DE LEON CANO** a Magistrada de la Corte de Apelaciones y otros tribunales de igual categoría, ya que, durante su actuación jurisdiccional, como Magistrada vocal II de la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal dentro del caso Mack, en el año 2003, conculcó normatividad ordinaria procesal y con ello el debido proceso. Con su proceder afectó directamente el ámbito de la administración de justicia y deja de manifiesto que su conducta no se encuadra dentro de los preceptos éticos aplicables. La sentencia de Casación emitida por la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, el 14 de enero de 2004 evidenció que **ROSA MARÍA DE LEÓN CANO** en su calidad de magistrada de la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones Penal, conculcó preceptos fundamentales, entre otros el establecido en el artículo 430 del Código Procesal Penal y por extensión violó los artículos 12, 113, 153, 203 y 207 de la Constitución Política de la República.

**CONSIDERACIONES DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS
HUMANOS RESPECTO AL CASO MACK Y DE LOS JUECES QUE FUERON PARTE
EN LA CONDUCCIÓN DEL PROCESO**

A. La actuación de Rosa María de León Cano trascendió incluso a nivel internacional como se evidencia con la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en adelante la Corte IDH, el 25 de noviembre de 2003, por la cual se condenó al Estado guatemalteco por violar las garantías judiciales y protección judicial¹ a la familia de Myrna Mack Chang.

¹ artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

B. Para determinar las violaciones aludidas, la Corte efectuó un examen del conjunto de las actuaciones judiciales internas que le permitió obtener una visión integral de las mismas, estableciendo posteriormente que dichas actuaciones contravinieron los estándares sobre las garantías y protección judiciales y el derecho a un recurso efectivo, que emergen de los artículos 8 y 25 de la Convención (*Conf. Párrafos 200 y 201 de la sentencia Corte IDH*). En este sentido, la Corte IDH determinó como probado la falta de diligencia y voluntad de los tribunales de justicia para impulsar el procedimiento penal tendiente a esclarecer todos los hechos de la muerte de Myrna Mack Chang y sancionar a todos los responsables (*Conf. Párrafo 203 de la sentencia Corte IDH*).

Dentro los hechos que establece la Corte IDH, que, “al referirse a las garantías judiciales, también conocidas como garantías procesales, ha establecido que para que en un proceso existan verdaderamente dichas garantías, conforme a las disposiciones del artículo 8 de la Convención, es preciso que se observen todos los requisitos que “sirv[a]n para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho”, es decir, las “condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial”. A lo expuesto añade la Corte IDH que “En el capítulo sobre hechos probados se demostró la falta de diligencia y voluntad de los tribunales de justicia para impulsar el procedimiento penal tendiente a esclarecer todos los hechos de la muerte de Myrna Mack Chang y sancionar a todos los responsables.”. (*Conf. Párrafos 202 y 203 de la sentencia corte IDH*) el subrayado es propio.

C. Asimismo, la Corte IDH ha establecido en reiterada jurisprudencia que el derecho a la tutela judicial efectiva exige a los jueces que dirijan el proceso de modo a evitar que dilaciones y entorpecimientos indebidos conduzcan a la impunidad, frustrando así la debida protección judicial de los derechos humanos (*Conf. Párrafo 202 y 211 de la sentencia Corte IDH*).

1. DE LAS CALIDADES REQUERIDAS PARA SER MAGISTRADO.

La comisión de postulación definió el perfil para optar al cargo (magistrados a la Corte Suprema de Justicia y magistrados de la Sala de la Corte de Apelaciones) que debe satisfacerse por cada uno de los postulantes dividiéndolo en: 1. Requisitos constitucionales (art. 207 de la Constitución Política de la República). 2. Requisitos éticos. 3. Requisitos académicos. 4. Requisitos profesionales. 5. Requisitos de proyección humana.

En cuanto a los requisitos éticos a evaluar, por las consideraciones que se expondrán más adelante, NO SE DEBE ATRIBUIR ESTA CALIDAD A ROSA MARIA DE LEON CANO, y tomando cuenta que no se puede separar la ética de la honorabilidad, puesto que dicha calidad se tiene o no por la persona, sin que al respecto existan valoraciones intermedias, se concluye que dados los antecedentes de la postulante, no posee la mencionada calidad.

En lo que atañe al punto 5 no se establece que la postulante haya efectuado investigaciones en el campo jurídico y realizado publicaciones, por lo que en este aspecto se considera que tampoco satisface el requerimiento exigido, circunstancia que lo torna inidóneo para el cargo de Magistrada de la Corte Suprema de Justicia o bien de la Corte de Apelaciones.

2. ELEMENTOS PARA LA COMPROBACIÓN DE LA HONORABILIDAD

La Corte de Constitucionalidad ha elaborado un Corpus doctrinal² que orienta el actuar del poder público, cuando se le exija – para la elección, nominación, selección u otro procedimiento similar- valorar el aspecto reconocida honorabilidad, sobre el que la Corte se ha pronunciado con anterioridad en cuanto a considerarse éste un requerimiento comprobable mediante una serie de elementos.

La comprobación de la honorabilidad del postulante deberá hacerse a través de la verificación de la concurrencia de los siguientes elementos:

1. Acreditaciones; consistente en la presentación de documentos o certificaciones.
2. Criterios sociales; integrados por la buena conducta profesional, la estima gremial, el reconocimiento del foro público, el decoro profesional, entre otros.
3. Repercusiones en el actuar; que se manifiestan tanto en lo profesional, en la judicatura u otro servicio prestado desde la administración pública o en cualquier otro ramo, entendiéndose como tal no solo su ejercicio profesional, sino también las actividades personales, comerciales o de cualquier otra índole que resultaren incompatibles con el ejercicio de la función pública.
4. Criterios de organismos internacionales; “Que conforme los Principios Básicos Relativos a la Independencia Judicial, reconocidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptados por el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán del veintiséis de agosto al seis de septiembre de mil novecientos ochenta y cinco, y confirmados por la Asamblea General en sus resoluciones 40/32 de veintinueve de noviembre de mil novecientos ochenta y cinco, y 40/146 de trece de diciembre de mil novecientos ochenta y cinco, dicha independencia implica el reconocimiento y las garantías adecuadas para que: “Los jueces resuelvan los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo”. Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumento internacional que forma parte del bloque de constitucionalidad, garantiza la inmunidad e independencia de los jueces, así como el acceso de toda persona a un juez o tribunal competente, independiente e imparcial”.
5. Legislación ordinaria; “Por su parte, el primer considerando de la Ley de la Carrera Judicial establece: “Que una de las grandes debilidades estructurales del Estado guatemalteco residen en el sistema de justicia, que es uno de los servicios públicos esenciales; que su reforma y modernización debe dirigirse a impedir que éste genere y encubra un sistema de impunidad y corrupción y, al mismo tiempo, se revierta la ineficacia, se garantice el libre acceso a la justicia, la imparcialidad en su aplicación, la independencia judicial, la autoridad ética, la probidad del sistema en su conjunto y modernización”; y en ese orden de ideas, el artículo 70 de la Ley del Organismo Judicial establece como prohibiciones para los jueces y magistrados que integran dicho Organismo del Estado, el hecho de tener negocios o ejercer oficios que sean incompatibles con el decoro de su profesión”. y

² Corte de Constitucionalidad, expediente de inconstitucionalidad 942-2010, sentencia de fecha 24 de agosto de 2010. La Corte también se ha pronunciado sobre la reconocida honorabilidad en los siguientes expedientes: 273-91; 205-94, 3690-2009; 1167-2014 y 4639-2014.

6. criterios complementarios La exégesis anterior, sienta criterios para lo que en diversos ámbitos se denomina “Guía de buenas prácticas” a favor de la transparencia y con ello, ante futuros procesos de elección de diversos funcionarios públicos (no sólo por parte del Congreso de la República, sino también por Poderes del Estado o entidades gubernamentales), se cuente con criterios que orienten su actuar en el futuro, tal y como estimó la Corte de Constitucionalidad en el Expediente 2409-2009, sentencia de fecha veinticinco de noviembre de dos mil nueve, al considerar: “debido a las especiales circunstancias que lo generaron y eventualmente podrían nuevamente acaecer, esta sentencia debe clarificar el cómo del actuar público”.

3. DE LOS PRECEPTOS ETICOS APLICABLES

La presente objeción también encuentra su asidero en la actuación jurisdiccional de ROSA MARIA DE LEON CANO, la cual ha conculcado los más elementales principios del debido proceso, contemplado en el artículo 12 de la Constitución Política de la República, valores y principios éticos, aunado a que dicho proceder entraña la violación del máximo valor que informa el trabajo jurisdiccional como lo es la consecución de la Justicia.

La Corte IDH ha opinado respecto al artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que el mismo reconoce el llamado “debido proceso legal”, que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial³.

En este contexto la labor del jurista debe dirigirse a conseguir la justa, pacífica, armónica y funcional convivencia, del conglomerado social, y debe prestarse ajustado a claras normas éticas y morales, que exigen de cada juez, honor, decoro, rectitud, respeto y dignidad en todas y cada una de sus actuaciones, actitud profesional que requiere una conducta recta y ejemplar, pues debe ser un paradigma de honestidad⁴.

La rectitud es un valor sinónimo de la justicia, que exige del profesional el ejercicio de la igualdad, la equidad y la imparcialidad en sus labores⁵. Al confrontar el desempeño de la postulante denunciada cuando ejercía el cargo de magistrado vocal II de la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del ramo penal en el año 2003, durante la tramitación del caso Mack, con los parámetros éticos a los que se ha hecho referencia, se puede inferir que incurrió en actitudes que riñen directamente con los mismos.

A lo expuesto se puede agregar que la postulante, faltó a los preceptos incluidos en el Acuerdo 7-2001 de la Corte Suprema de Justicia, Normas Éticas del Organismo Judicial, el cual se encontraba vigente al momento en que fungía como vocal II de la Corte de Apelaciones del ramo penal, en especial en lo que respecta al artículo 18.

En lo que atañe al artículo 18 se considera vulnerado la literal a) que establecía: “Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado, empezando por la puntualidad en sus

³ Corte Interamericana de Derechos humanos. Opinión consultiva oc-9/87 del 6 de octubre de 1987, parr. 28.

⁴Tercer considerando del Código de Ética Profesional.

⁵ Ibarra, Guadalupe. Ética y valores profesionales. Disponible en GI Rosales - Reencuentro, 2007 - redalyc.uaemex.mx, consultado el 11 de marzo de 2013.

labores, y abstenerse de actos y omisiones que causen la suspensión o mal funcionamiento del servicio.”(El énfasis es propio). Lo manifestado deviene de que al emitir la sentencia de fecha siete de mayo de dos mil tres, emitida por la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del ramo penal, se tuvo por acreditado que el Departamento de Seguridad Presidencial *es lo mismo* que el Estado Mayor Presidencial, hecho decisivo que le sirvió para absolver al sindicado Juan Valencia Osorio, pues con ello concluye que no se evidencia la relación de causalidad en el hecho que se le imputa al acusado en mención, y por ende, tampoco la autoría que se le atribuye, sin que ese hecho se haya tenido por probado por el Tribunal Tercero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala, violando de esa manera los artículos 10 y 36 numeral 3° del Código Penal. Aparte de ello, al tribunal de apelación especial le está vedado hacer la reconstrucción de la verdad histórica; debe respetar los hechos de la causa, fijados por el tribunal de sentencia, no pudiendo corregir, ni enmendar los hechos establecidos⁶, con lo que se produjo la vulneración a que se refiere la norma que se estima conculcada.

Por ello lo contundente de mi afirmación de que ROSA MARIA DE LEON CANO, cuando se desempeñaba como vocal II de la relacionada sala jurisdiccional, actuó contrario a la exigencia ética contemplada en la normatividad deontológica aplicable, en particular en cuanto a los postulados números 1, 3, 5, 6, 7 y 8 contemplados por el Código de Ética Profesional del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala

Los postulados aludidos se refieren a: probidad, prudencia, independencia, veracidad, juridicidad y eficiencia. En cuanto a la probidad de la postulante, se puede sustentar que la misma se vio comprometida si se considera que el trabajo de la judicatura debe evidenciar siempre rectitud, honradez e integridad de pensamiento y acción, lo que debe manifestarse especialmente en el irrestricto respeto a las garantías constitucionales que informan el proceso penal. Al avalar la sentencia de segundo grado referida párrafos arriba, se aleja del postulado referido. De ahí que su actuación no pueda calificarse de prudente, ni mucho menos que en su ejercicio haya tenido presente su independencia. En semejante sentido afrenta a la veracidad, puesto que con sus actos facilitó el propósito espurio de los accionantes, en menoscabo de la verdad que finalmente fue acreditada. En este orden de ideas, se sostiene que faltó a la juridicidad y a la eficiencia que deben caracterizar el desempeño de la judicatura.

Asimismo, con la actitud demostrada vulneró el precepto de imparcialidad estatuido en el artículo 30 del relacionado cuerpo deontológico. La anterior afirmación radica en que, al acoger la apelación especial interpuesta por la defensa en el caso Mack, lejos de impartir justicia libremente, sólo con sujeción a la Ley y a los principios que la informan, contribuyó a la violación del debido proceso.

Analizando los hechos expuestos resulta notorio que la postulante, cae dentro del denominado litigio malicioso, con lo que, en consecuencia, se aparta de los postulados éticos, contenidos en las normas deontológicas que sirven de sustento al presente veto.

4. CONCLUSIONES:

A. Es importante tomar en cuenta que la postulante no reúne las calidades requeridas por la ley

⁶ Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, recursos de casación conexados 109-2003 y 110-2003, sentencia de fecha 14 de enero de 2004.

para optar al cargo de Magistrada, toda vez que quedó demostrado que su desempeño jurisdiccional dentro del caso Mack demostró falta de independencia judicial e incluso desconocimiento de elementales principios del debido proceso. Prueba de ello lo constituyó la sentencia de Casación de la Corte Suprema de Justicia del 14 de enero de 2004 en la que se evidenció que Rosa María de León Cano en su calidad de magistrada de la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones Penal, conculcó preceptos fundamentales del Código Procesal Penal y de la Constitución Política de la República de Guatemala.

B. Además se debe agregar que el ejercicio de Rosa María de León Cano como magistrada vocal II de la Corte de Apelaciones del ramo penal, violó taxativamente la obligación reconocida en el acuerdo 7-2001 de la Corte Suprema de Justicia, cuyo considerando segundo señala: *“Que los magistrados, jueces, funcionarios, auxiliares y trabajadores administrativos son el eje esencial de la administración de justicia y actúan para servicio de la comunidad, por lo que es necesario que su función sea prestada ajustándose a claras normas éticas y morales, que exigen de cada uno: honor, probidad, decoro, prudencia, rectitud, lealtad, respeto, independencia, imparcialidad, veracidad, eficacia, solidaridad y dignidad en todas y cada una de sus actuaciones, manifestando una conducta recta, ejemplar y demostrando honestidad y buena fe en todos sus actos”*.

C. Lo manifestado se confirma ante los actos realizados por Rosa María de León Cano como magistrada vocal II de la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del ramo penal quien permitió con su decisión que el litigio malicioso promovido por la defensa de los acusados en el caso Mack, pudiera concretarse, circunstancia que constituye una flagrante violación de los artículos 19 y 30 del Código de Ética Profesional del CANG. Asimismo, viola los artículos constitucionales 2, 44, 46, 203 y 207, que exigen de los órganos jurisdiccionales que en sus resoluciones se apeguen a los preceptos reconocidos por la propia Constitución y a los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos.

5. POR TANTO:

La postulante ROSA MARIA DE LEON CANO, por todas las consideraciones vertidas NO ES PERSONA IDÓNEA para optar al cargo a Magistrada de la Corte Suprema de Justicia y/o Magistrada de la Corte de Apelaciones y Tribunales de Igual Categoría porque ha faltado a las calidades requeridas por la Constitución Política de la República de Guatemala, el Código de Ética Profesional del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y a las normas éticas del Organismo Judicial, careciendo así de idoneidad por faltas a la ética, a la Reconocida Honorabilidad y los factores académicos necesarios para el ejercicio del cargo de Magistrada.

6. FUNDAMENTO DE DERECHO:

Artículo 28. Derecho de petición (Constitución Política de la República de Guatemala). Los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir, individual o colectivamente, peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley.

En materia administrativa el término para resolver las peticiones y notificar las resoluciones no podrá exceder de treinta días.

En materia fiscal, para impugnar resoluciones administrativas en los expedientes que se originen en reparos o ajustes por cualquier tributo, no se exigirá al contribuyente el pago previo del impuesto o garantía alguna.

En virtud de lo expuesto en el presente señalamiento de impedimento, a la Comisión de Postulación, respetuosamente,

7. SOLICITO:

1. Que se tenga por presentado mi pronunciamiento y veto en relación a la candidatura del postulante ROSA MARIA DE LEON CANO para el cargo de Magistrada de las Salas de la Corte de Apelaciones y otros tribunales de igual categoría, con la finalidad de que no sea considerada dentro de la lista de nombres que se remita al Congreso de la República por haber incumplido sus deberes jurisdiccionales al momento de administrar justicia en el caso de Myrna Mack Chang; y por no cumplir con el requisito constitucional de reconocida honorabilidad.

2. Que se tenga por presentada las copias de la sentencia de casación y de la sentencia de la Corte IDH que se anexan en disco compacto a este señalamiento de impedimento.

Ciudad de Guatemala, septiembre 2019.



Helen Beatriz Mack Chang
Representante Legal de Fundación Myrna Mack

**REGISTRO DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DE NOMBRAMIENTOS**

Con base al acta notarial autorizada en la ciudad de Guatemala, en fecha 21 de Febrero 2019, por el Notario JOSÉ ALBERTO BARRERA SANTOS, se inscribe en este Registro bajo la partida número 332, folio 332, del libro 59 de Nombramientos, el nombramiento de HELEN BEATRIZ MACK CHANG, como PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad FUNDACION MYRNA MACK, inscrita en el Registro Civil de la Municipalidad de Guatemala, departamento de Guatemala, bajo la partida 105, folio 357 del libro 43 de Personas Jurídicas. Plazo del Cargo: Inicia el 26/11/2018 y vence el 25/11/2021. Guatemala, 5 de Marzo 2019. Expediente Número 5121021988984. Arancel según Acuerdo Gubernativo Número 404-2011, Artículo 2: Q.75.00.

El Registro del presente documento no prejuzga sobre el contenido ni validez del mismo, ni del original que reproduce y no convalida hechos o actos nulos o ilícitos.



[Handwritten signature]
Lidia Jennie Alejandra Tello Rosales
Registradora
Registro de las Personas Jurídicas
Ministerio de Gobernación



Registro de las Personas Jurídicas
5ª. avenida 10-53, zona 1, ciudad de Guatemala, PBX.: 2413 - 8888, exts.: 5614 y 5615
www.mingob.gob.gt/rpj

Impreso el: 07 Mar 2019 09:10:11

"FUNDACIÓN MYRNA MACK"
ACTA NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO
PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL

En la ciudad de Guatemala el veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, siendo las nueve horas en punto, Yo, José Alberto Barrera Santos, Notario, me encuentro constituido en la segunda calle quince guion quince de la zona trece de esta ciudad, a requerimiento de la señora Helen Beatriz Mack Chang, quien manifiesta ser de sesenta y siete años de edad, soltera, guatemalteca, ejecutiva, con domicilio en el Departamento de Guatemala, quien se identifica con el Documento Personal de Identificación (DPI) Código Único de Identificación (CUI) mil ochocientos cincuenta y dos, setenta y dos mil quinientos treinta y tres, mil ciento uno (1852 72533 1101), extendido por el Registro Nacional de las Personas (RENAP) de la Republica de Guatemala, quien requiere mis servicios profesionales con el objeto de hacer constar su nombramiento como Presidente de la Junta Directiva y Representante Legal de la "FUNDACIÓN MYRNA MACK", por lo que se procede de la siguiente manera: PRIMERO: La requirente me pone a la vista primer testimonio de la escritura pública número cincuenta y uno (51) autorizada en la ciudad de Guatemala el veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y tres por la Notaria Dinora Recinos Cueto de Roche, mediante la cual se constituyó la "FUNDACIÓN MYRNA MACK", la cual se encuentra inscrita en el Registro Civil del municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, bajo la partida ciento cinco (105), folio trescientos cincuenta y siete (357) del libro cuarenta y tres (43) de personas jurídicas; y la cual fue modificada por las escrituras públicas: a) número noventa y nueve (99) de fecha veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y tres, autorizada en esta ciudad por la notario Dinora Recinos Cueto de Roche; b) número veinticinco (25), autorizada en esta ciudad por la notaria Gladys Annabella Morfin Mansilla el dieciséis de diciembre de dos mil ocho, que contiene la modificación de los estatutos de la "FUNDACIÓN MYRNA MACK" anteriormente mencionada, de las cuales, ambos testimonios tengo a la vista; y c) Acuerdo Ministerial número mil ciento sesenta y nueve guion dos mil uno, de fecha veintiocho de noviembre de dos mil uno, suscrito por el Ministro de



José Alberto Barrera Santos
Abogado y Notario

Gobernación Byron Humberto Barrientos Díaz. **SEGUNDO:** En la escritura pública número veinticinco (25) autorizada por la notaría Gladys Annabella Morfin Mansilla, citada en el punto anterior, en la cláusula SEGUNDA, los artículos vigésimo sexto, vigésimo séptimo, vigésimo octavo, trigésimo segundo y trigésimo tercero de los estatutos de la "FUNDACIÓN MYRNA MACK", que copiados textualmente en su parte conducente dicen: "...ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO: INTEGRACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA: La Junta Directiva es el órgano coordinador, director y ejecutor de "FUNDACIÓN", encargado de velar por la buena conducción de la Institución. Se integra con los miembros de "LA FUNDACION", en los siguientes cargos: Presidencia, Vicepresidencia, Secretaría, Tesorería, dos Vocales. ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO: ELECCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA: El sistema de elección para integrar la Junta Directiva será por cargos. La votación se hará en forma nominal o como lo decida la Asamblea General Ordinaria. Resultaran electos(as) quienes obtengan el cincuenta por ciento (50%) más uno de votos. La Junta Directiva tomará posesión, a más tardar, quince días después de la fecha de su elección, ARTICULO VIGESIMO OCTAVO. DURACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA: Las y los miembros de la junta directiva fungirán en los cargos para los que fueren electos por un período de tres años, siendo válida su reelección. ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO. ATRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA: Son atribuciones de la Junta Directiva: a) Cumplir y hacer que se cumplan los presentes estatutos, las decisiones de Asamblea General y las decisiones propias de la Junta Directiva; b) Ejercer la representación legal de "LA FUNDACION" por medio de su Presidente (a), quien podrá delegar esta representación en cualquier otro miembro de la Junta Directiva para asuntos determinados; c) Acordar la concesión de beneficios, donaciones, servicios o prestaciones que constituyen los objetivos y fines de esta Fundación, a favor de las personas o grupos beneficiarios que reúnan los requisitos que se establecen en este Instrumento; d) Conocer y aprobar los planes de trabajo, labores y obras a realizar; e) Proponer las políticas y los

"FUNDACIÓN MYRNA MACK"
ACTA NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO
PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL

reglamentos que sean necesarios para la buena marcha de los asuntos de "LA FUNDACION"; f) Disponer la política de contrataciones, funciones y régimen del personal de "LA FUNDACION"; g) Acordar el otorgamiento de mandatos especiales y designar a quienes deban ejercerlos; h) Administrar el patrimonio de la Fundación; i) Autorizar las gastos de funcionamiento; j) Conocer el plan de trabajo, el presupuesto anual, los informes sobre las actividades realizadas y los estados financieros y contables de la entidad presentados por el Director Ejecutivo, previamente a someterlos a consideración de la Asamblea General, y una vez aprobada por esta deberá remitir copia certificada a la Procuraduría General de la Nación; k) Formalizar cuando así lo haya aprobado la Asamblea General en Representación de la Fundación las adjudicaciones, transferencias, herencias, legados y donaciones; l) Autorizar gastos presupuestarios imprevistos de los cuales se dará cuenta a la Asamblea General en su sesión más próxima; m) Designar las comisiones y asesorías que estime convenientes; n) Conocer las denuncias en contra de las y los miembros, sobre presunta comisión de faltas, para la imposición de las sanciones que correspondan; ñ) Nombrar y remover de su cargo a quien ejerza la Dirección Ejecutiva; o) Proponer a la Asamblea General el ingreso de nuevos miembros benefactores y ordinarios en los términos que se indican en el artículo sexto inciso b; y c; p) Proponer a la Asamblea General las distinciones honoríficas a personas individuales o jurídicas que así lo ameriten por sus servicios de asistencia y bienestar social; q) Disponer la organización de sucursales, agencias, delegaciones o representaciones de "LA FUNDACION"; previa aprobación de la Asamblea General; r) Las demás que le corresponda por su calidad de órgano administrativo, o por disposición de la Asamblea General. ARTICULO TRIGESIMO TERCERO: FACULTADES ESPECÍFICAS DE CADA MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA. I. DEL PRESIDENTE: Son atribuciones específicas del Presidente(a) de la Junta Directiva: a) Ejercer la representación legal de "LA FUNDACION", en todos los actos y contratos en que "LA FUNDACION" participe. El Presidente



José Alberto Barrera Santos
Abogado y Notario

(a) podrá delegar la representación legal en otros miembros directivos para asuntos determinados, siempre que hubiese sido facultado para ello en la Asamblea General; b) Convocar y presidir las sesiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva; c) Vender, donar, comprar o disponer de cualquier otro modo de los bienes de "LA FUNDACION", previa autorización de la Asamblea General; d) Otorgar y revocar poderes con representación especial dando cuenta de ello a la Junta Directiva; e) Autorizar las órdenes de pago u otros documentos de crédito o designar por escrito a otro de los miembros para que lo haga en su defecto; f) Ejercer doble voto en caso de empate, en las sesiones de la Asamblea General y de Junta Directiva; g) Aquellas que le corresponda por la naturaleza del cargo o por disposición de la Asamblea;...". **TERCERO:** Asimismo, tengo a la vista el acta que contiene la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de Socios Fundadores, Benefactores y Ordinarios de la "FUNDACIÓN MYRNA MACK", celebrada el diecinueve de noviembre de dos mil dieciocho, en la sede la Fundación, en la cual obra el PUNTO SÉPTIMO cuyas partes conducentes establecen: "PUNTO SÉPTIMO: Elección de Junta Directiva dos mil dieciocho - dos mil veintiuno (2018-2021). Elección de Junta Directiva dos mil dieciocho - dos mil veintiuno (2018-2021). La Señora Presidenta de la Junta Directiva: Licenciada Helen Beatriz Mack Chang, informa a los miembros de la Asamblea General Ordinaria de Socios Fundadores, Benefactores y Ordinarios de la "FUNDACIÓN MYRNA MACK", que el período para el cual fue electa la actual Junta Directiva vencerá el veinticinco de noviembre del dos mil dieciocho, por lo que de acuerdo a lo que dictan los artículos VIGÉSIMO TERCERO, VIGESIMO SEXTO, VIGÉSIMO SÉPTIMO Y VIGÉSIMO OCTAVO de los Estatutos de la Fundación, debe procederse a la elección de la nueva Junta Directiva. Por lo expuesto se procede llevar a cabo el proceso de elección. Se presentan como candidatos a los diferentes cargos, los mismos miembros que actualmente los ocupan; no existiendo otros candidatos(as), se procede a la votación, quedando integrada la Junta Directiva, por

"FUNDACIÓN MYRNA MACK"
ACTA NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO
PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL

unanimidad de los votos de los socios Fundadores, Benefactores y Ordinarios presentes y representados, de la siguiente manera: Presidenta: Helen Beatriz Mack Chang; Vicepresidente: Erick Benjamín Aldana Mendoza; Secretario: Raúl Alcides Castillo Rodas; Tesorero: Carlos Vicente Arrazola González; Vocal I: Juan Hernández Pico y Vocal II: Clara María Josefina Arenas Bianchi. La Asamblea General Ordinaria en razón de los resultados obtenidos, por unanimidad Acuerda: 7.1 Declarar electos(as) como miembros de la Junta Directiva de la "FUNDACIÓN MYRNA MACK" a las personas ya indicadas. 7.2 El período para el cual serán electos se encuentra comprendido a partir del veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho. 7.3 La nueva Junta Directiva tomará posesión el veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, y tendrá todas las facultades establecidas en los estatutos de la Fundación. 7.3 De acuerdo a lo que dicta el Artículo trigésimo segundo, literal b) la Señora Presidenta electa Helen Beatriz Mack Chang ejercerá la Representación Legal de la "Fundación". CUARTO: No habiendo más que hacer constar, y para que le sirva como nombramiento a Helen Beatriz Mack Chang como Presidente de la Junta Directiva y Representante Legal de "FUNDACIÓN MYRNA MACK", se finaliza la presente Acta Notarial en el mismo lugar de su inicio, a las diez horas en punto, la cual queda contenida en tres hojas de papel bond tamaño oficio, útiles las primeras dos de ellas en ambos lados y la tercera únicamente en su anverso y, a la que se le adhiere un timbre fiscal de cien quetzales número de registro doscientos noventa y un mil novecientos sesenta y seis (291966) para cubrir el impuesto correspondiente. La presente acta es leída por la requirente quien bien impuesto de su contenido, validez, objeto, efectos legales, y obligación registral, la acepta, ratifica, firmando, únicamente el infrascrito notario, quien de todo el contenido de la presente acta notarial DA FE.



José Alberto Barrera Santos
Abogado y Notario